



Signos vitales

Alberto Aguirre

✉ alberto.aguirre@eleconomista.mx

Salvar a Sinaloa

A prisionados por la violencia y las reyertas políticas, los sectores productivos de Sinaloa afrontan una etapa crítica. El campo, afectado por las condiciones climatológicas y la imposición de aranceles; los servicios, supeditados a la creciente inseguridad. Y la administración estatal, inerte incluso antes del Culiacanazo.

Más de un millar de negocios han cerrado. La vida nocturna prácticamente está proscrita y con ello han desaparecido casi 30,000 fuentes de empleo. En Mazatlán —el principal destino turístico de la entidad— la paralización de las obras de 187 torres que representaban una derrama de más de 50,000 millones de pesos para el sector de la construcción y las afectaciones a la industria hotelera —que opera al 30% de su capacidad y ha tenido que ajustar tarifas—, son reflejo de una crisis económica que se extiende, ante la incapacidad del gobierno estatal y el abandono de la Federación.

El secretario de Agricultura, **Julio Berdegué**, es sinaloense. Los negocios de su familia resienten los malos tiempos. Y los sectores productivos están a la espera de estímulos que sirvan para reactivar la economía local, ante una inevitable caída en la captación fiscal, lo que agravará aún más al ya de por sí golpeado gobierno de **Rubén Rocha**. En el primer trimestre del 2025, un informe sobre las participaciones federales arrojó que Sinaloa es la única entidad en todo el país que presenta una disminución de 5.3% en las partidas provenientes de la Federación.

Estas restricciones se explican, parcialmente, la decisión del SAT de revocar un convenio de fiscalización con el estado, que se tradujo en una merma de 900 millones de pesos

por la ejecución de auditorías federales. La administración estatal tuvo que solicitar al Congreso un nuevo endeudamiento por 2,200 millones de pesos con la banca comercial.

Este fin de semana, la presidenta **Claudia Sheinbaum** acudirá Guasave y el panorama no podría ser más desolador. La violencia ha tenido un impacto devastador en la economía de Sinaloa.

La percepción de inseguridad entre la población ha alcanzado niveles alarmantes, en Culiacán, el 89.7% de los habitantes considera inseguro vivir en su ciudad. A pesar de estos datos, el gobernador Rocha ha minimizado la violencia, negando investigaciones en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado y calificando las acusaciones como campañas de desprestigio.

La gestión de Rocha ha sido objeto de críticas por su manejo de la violencia y la falta de respuestas efectivas. En enero de 2025, ciudadanos de diversas zonas y municipios de Sinaloa se unieron en una marcha para exigir su renuncia.

La situación en Sinaloa requiere una atención urgente y decidida por parte del gobierno federal. La presidenta Sheinbaum enfrenta el desafío de abordar una crisis que no solo afecta a un estado, sino que también tiene implicaciones para la seguridad nacional y las relaciones internacionales de México.

Efectos secundarios

INTENCIONES. Con profusión circulan versiones en los círculos más radicales de la 4T sobre el futuro de los ex secretarios de la Defensa y Marina. Ambos —según esas versiones aviesas— quisieron repetir en sus cargos y, fracasada esa misión, ahora intentan incorporarse al cuerpo diplomático. Al menos en el caso del almirante **Rafael Ojeda Durán**, hay otros datos: su inminente incorporación como socio residente al Club de Golf de Acapulco. Con la recomendación de cinco asociados al exclusivo centro deportivo y social, la nominación del ex titular de la Semar será votada en la asamblea.